

Más cerca de la cárcel

Nicolás Lynch

La audacia del prófugo Alberto Fujimori de abandonar su refugio en el Japón y entrar a Chile, buscando acercarse al territorio nacional, es una acción inesperada que enardece al grupo mafioso y algún público que lo apoya pero, al mismo tiempo, también lo podría poner más cerca de la cárcel. En esta hora se probará, frente al intento de Fujimori por “legalizarse”, quién vacila y quién se mantiene firme en el combate a la corrupción.

Es indudable que esta maniobra del prófugo responde a un cálculo político premeditado que toma en cuenta la creciente actividad de la mafia en el Perú, su afán por colocarse electoralmente, conseguir la influencia política necesaria para negociar la libertad de su jefe así como una posible candidatura presidencial y, finalmente, la impunidad de los crímenes que cometieron la década pasada. Tampoco es ajena a esta maniobra la actual situación de las relaciones entre Chile y el Perú, que increíblemente, el prófugo pretendería hacer jugar a su favor, demostrándonos una vez más que poco le importan los intereses nacionales cuando sus afanes de poder están en juego.

Desafortunadamente, esta maniobra se encuentra con un gobierno débil que está al final de su mandato y que ha sido especialmente condescendiente en el combate a la corrupción y la impunidad, que fueron demandas centrales de la transición a la democracia. Esta debilidad se ha manifestado en la incapacidad para perseguir en el terreno policial y judicial a Fujimori, habiendo sido el Perú burlado una y otra vez por el prófugo y sus secuaces. Además, entre los candidatos en competencia también podría encontrar algún terreno favorable. Lourdes Flores no se ha caracterizado en los últimos años por un zanjamiento político explícito con el exdictador y Alan García ha evitado una condena clara a los intentos de Fujimori por ser candidato presidencial. El afán por ganar lo que consideran el “voto fujimorista” inhibe a determinados políticos de enfrentar a Fujimori como el prófugo de la justicia que es.

Esta situación deja a las organizaciones de la sociedad civil, especialmente aquellas ligadas a la defensa de los derechos humanos, así como a algunos partidos de izquierda y el centro democráticos como los únicos dispuestos a cerrar el paso de las maniobras del exdictador. Esta situación cambia las condiciones de la campaña electoral porque le da una nueva prioridad, que progresivamente había venido perdiendo, al tema de corrupción e impunidad, y además podría establecer una nueva polarización entre las fuerzas políticas dividiendo el espectro entre los que vacilan frente al prófugo y aquellos que se mantienen firmes en la urgencia de llevarlo frente a la justicia.

Es indudable que se ha creado una nueva crisis y que en lo inmediato las fuerzas de la corrupción y sus perspectivas de impunidad ganan puntos y se recolocan en la escena política. Que esto nos sirva de lección para no tolerar nunca más que las autoridades elegidas presten poca o ninguna atención al combate a esta lacra que nos mantiene en el atraso y la miseria moral. Sin embargo, la crisis también puede ayudar a que se definan mejor los campos en la política nacional. Ya no se trata solo de definir puntos de vista sobre el porvenir legal del exdictador y sus crímenes. La nueva situación nos pone otra vez frente a la necesidad de optar con toda claridad entre el continuismo o la ruptura con el legado de clientelismo neoliberal que nos dejara el régimen mafioso y frente al cual este gobierno no se ha atrevido a establecer una indispensable

distancia. Esto también puede tener consecuencias en los resultados de las próximas elecciones, beneficiando a aquellos que sepan recoger esta rabia contenida del pueblo peruano contra la corrupción, la impunidad y el dinero fácil, que se vuelven a atrever justamente porque no ha existido la energía política suficiente para ponerlos a todos en el sitio que les corresponde que no es otro que una cárcel peruana para que paguen por los graves crímenes que cometieron.